



CFCP - Sala I
CPE 868/2010/CFC2
"BONGGI, María del Carmen Y
OTROS s/recurso de casación"

Cámara Federal de Casación Penal

REGISTRO N°1405/20

///nos Aires, a los 15 días del mes de octubre del año dos mil veinte, se reúne la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, bajo la Presidencia de la señora jueza, doctora Ana María Figueroa, e integrada por los señores jueces, doctores Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña como Vocales, reunidos de manera remota y virtual de conformidad con lo establecido en los Decretos 260/20, 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20 y 792/20 del Poder Ejecutivo Nacional (en adelante PEN); Acordadas 4/20, 6/20, 8/20, 10/20, 12/20, 13/20, 14/20, 16/20, 18/20, 25/20, 27/20 y 31/20 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante CSJN), y Acordadas 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20 y 15/20 de la Cámara Federal de Casación Penal (en adelante CFCP), a los efectos de dictar sentencia en la causa **CPE 868/2010/CFC2** del registro de esta Sala, caratulada: **"BONGGI, María del Carmen y otros s/recurso de casación"** de cuyas constancias **RESULTA:**

1°) Que la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico (en adelante CNPE) resolvió *"confirmar la resolución apelada, en cuanto dispone el sobreseimiento de Juan Pelliccioni, Alberto Pacinotti, Jorge Amado, Francisco Morelli, Cristian*



Siccardi, Francisco Monpelat, Jorge Martín, María del Carmen Bonggi, Lisandro Tece, Ernesto Rolli y Osvaldo Classen (conf. Artículo 336, inciso 3º del Código [Procesal] Penal de la Nación)” -fs. 4472/4474 vta.-.

Para resolver como lo hizo refirió que el juez de instrucción entendió que desde que Cargill S.A. percibió los reintegros impositivos hasta que los imputados fueron citados a prestar declaración indagatoria el 7 de agosto de 2017, transcurrieron más de nueve años sin que se verificaran hechos interruptivos. Además, citando al instructor, refirió que el delito atribuido no encuadra en una figura legal.

Adujo la Sala A que el fiscal apeló la decisión únicamente en lo que se refiere al año 2008, porque entiende que *“el plazo de prescripción debe computarse desde el cierre del ejercicio anual o sea, en el caso del ejercicio comercial 2008, desde el 31 de diciembre de 2008”* y que desde esa fecha hasta la citación a indagatoria no transcurrió el plazo de pena máxima previsto por el artículo 3 de la Ley Penal Tributaria. Además, indicó que el fiscal también hizo referencia a la investigación que se encuentra llevando a cabo respecto de hechos similares, denunciados posteriormente por el organismo recaudador respecto de Cargill, que corresponden al año calendario 2008. Por último, señaló que el letrado de la querella se agravió por entender que los hechos no están prescriptos y que tampoco cabe sobreseer a los imputados por inexistencia de delito.

Ponderó la Sala *a quo* que en el caso se investigan reintegros de créditos fiscales que se sospechan justificados por facturas apócrifas, por operaciones de exportación de cereales y granos; que del legajo principal surge que el organismo recaudador no cuestionó las

Fecha de firma: 26/10/2020

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL



#11612393#270707133#20201015131132694



Cámara Federal de Casación Penal

operaciones de compra de granos y cereales que luego Cargill exportó; citó el testimonio de la supervisora de la División de Fiscalización de Devoluciones de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales, corroboró que las adquisiciones habían sido efectivamente realizadas y que esto lo volcó por escrito en un informe; en el mismo sentido lo habría hecho otra funcionaria de la entidad, ratificando que *"las retenciones se hallan vinculadas con adquisiciones efectivamente realizadas"*; sumadas a la imposibilidad de conocer la identidad de los proveedores por la intermediación de corredores en las operaciones, que no fueron controvertidas por el organismo de recaudación. Y estimó que estando reconocidas las compras de cereales, la existencia de los bienes y las exportaciones que dieron motivo a las solicitudes de reintegros, no puede entenderse que hubiesen existido aprovechamientos indebidos en los términos del artículo 3º de la Ley 24769 y en estos términos consideró el tribunal que los hechos denunciados no encuadran en una figura legal.

Por estos motivos confirmó los sobreseimientos en los términos del inciso 3 del artículo 336 del Código Procesal Penal de la Nación (en lo siguiente CPPN) -fs. 4472/4474 vta.-

2º) Contra dicho pronunciamiento interpusieron sendos recursos de casación el titular del Ministerio Público Fiscal y la parte querellante Administración Federal de Ingresos Público (en adelante AFIP).

Este último organismo presentó el escrito de fs. 4492/4506 vta. invocando los motivos de los dos incisos del



art. 456 del CPPN, pero posteriormente no mantuvo su voluntad recursiva y en consecuencia fue declarado desierto. Por ello, no nos vamos a referir a él.

El representante del Ministerio Público Fiscal, por su parte, presentó el recurso de casación a fs. 4507/4510 e invocando la causal del inciso 2 del art. 456 del rito, se agravio porque el tribunal de grado omitió el tratamiento del argumento según el cual, *"el delito previsto en el art. 3º de la ley 24.769 se vincula con el Presupuesto Anual del Estado, que es quien sufre el desapoderamiento, y en consecuencia, el 'ejercicio anual' al que se refiere esa norma comprende de enero a diciembre de cada año"*.

En segundo término se agravio porque la AFIP amplió la denuncia que se encuentra en trámite en la fiscalía y se incorporaron nuevas solicitudes de reintegro de IVA, por parte de Cargill, que inciden entre otros en el año 2008 y están siendo investigadas también por transgresión al art. 3º de la Ley 24769.

Entendió que la Sala A de la CNPE no tuvo en cuenta las razones esgrimidas ni hizo referencia a la ampliación de denuncia formulada por el organismo recaudador, limitándose al análisis de la tipicidad de la conducta respecto de reintegros percibidos hasta el mes de febrero de 2008, sin hacer referencia a los meses de marzo a diciembre de ese año que fueran percibidos indebidamente.

Por estos motivos consideró que la decisión no estaba motivada.

Dichos recursos fueron concedidos a fs. 4518 y vta. Asimismo, el remedio interpuesto por el señor fiscal fue mantenido en esta instancia a fs. 4522, mientras que - tal como se señalara con anterioridad- aquel interpuesto





Cámara Federal de Casación Penal

por la querella fue declarado desierto a fs. 4554, en razón de que no fue mantenido.

3º) Que en la etapa prevista en los arts. 465 cuarto párrafo y 466 del CPPN, formuló una presentación la defensa particular de los imputados en la que realizó una crítica a ambos recursos. Por los motivos señalados *supra*, nos limitaremos a la crítica formulada respecto del remedio interpuesto por el Sr. fiscal general.

En el punto, la defensa dijo que el representante del Ministerio Público Fiscal encauzó su recurso a través de la vía del art. 456 inc. 2 del CPPN, pero sólo con relación al ejercicio comercial 2008, consintiendo el sobreseimiento por los períodos anteriores (2003, 2004, 2005, 2006 y 2007) y entendió que como dicho recurso *"solo ha sido direccionado en relación al sobreseimiento por prescripción de dicho ejercicio 2008, y nada ha dicho acerca del sobreseimiento por la causal del inc. 3º del art. 336 CPPN, es que la decisión recurrida cuenta con fundamentos independientes y autónomos que no fueron rebatidos y que, por ende, dejan incólume la decisión adoptada"*.

En cuanto a los agravios vinculados con la prescripción se remitió a lo dicho al contestar el recurso de casación de la AFIP, en el que sostuvo que se tuvo en consideración la calificación más gravosa posible (art. 3 de la anterior Ley 24769, redacción vigente a la fecha de los hechos). *"Posteriormente, se evaluó si había transcurrido el máximo de la pena previsto para aquél delito (nueve años) desde las fechas de las últimas*



percepciones obtenidas por Cargill al cierre de cada uno de sus ejercicios comerciales.

Por otro lado se consideró (y fundamentó) que al concurrir materialmente los hechos investigados correspondía realizar el análisis de prescripción de manera separada, según cada ejercicio".

Finalmente concluyó que "se corroboró que entre las fechas de supuesta comisión de los hechos y el primer llamado a indagatoria (7 de agosto de 2017), había transcurrido en exceso los nueve años previstos como pena máxima, resolviéndose en consecuencia hacer lugar al sobreseimiento por la causal del art. 336 inc. 1º del CPPN".

Por estos motivos, solicitó se rechacen los recursos interpuestos y declaren inadmisibles los remedios intentados -fs. 82/88 vta.-.

4º) *La causa fue puesta en término de oficina por diez días, y posteriormente se cumplieron con las previsiones del art. 468, quedando las actuaciones en condiciones de ser resueltas.*

Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Ana María Figueroa, Diego G. Barroetaveña y Daniel Antonio Petrone.

*La señora jueza, **Dra. Ana María Figueroa** dijo:*

-I-

En primer lugar, corresponde advertir que si bien es cierto que los instrumentos internacionales no prevén, respecto de los representantes del Estado encargados de la persecución penal, un derecho a recurrir contra una sentencia en materia penal que les ha resultado adversa en sus pretensiones (cfr. CSJN, "Arce", Fallos 320:2145), no es menos cierto que el artículo 8.2 CADH enuncia que "toda





Cámara Federal de Casación Penal

persona" tiene derecho a ciertas garantías mínimas, entre las que se encuentra la "de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior" (punto h), y "persona" para los efectos de la Convención es "todo ser humano" (art. 1.2).

En la misma dirección, el artículo 14.5 PIDCyP establece que "toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior...".

De lo expuesto se deduce que ello no impide que tal recurso le sea concedido, por la legislación interna, a los órganos estatales encargados de la persecución penal y, en tal caso, el objeto y alcance del recurso están fijados por ella (cfr. voto del juez Garcia en los autos n° 9580 "Burgos, s/recurso de casación" reg. n° 15.968 del 25/2/2010).

La limitación objetiva para recurrir que establece el artículo 458 inciso 1° del Código Procesal Penal de la Nación, no es aplicable a situaciones como la ventilada en autos pues dicha norma establece claramente que su alcance se restringe a aquella en que medie una sentencia absolutoria, es decir, un pronunciamiento definitivo adoptado después de la sustanciación del proceso y del debate oral. El caso que nos ocupa, por el contrario, tratase de un sobreseimiento, especie ésta de decisorio judicial no contemplado por el referido artículo 458, y abarcado en cambio por el 457 por resultar un auto que pone fin a la acción.

Por lo demás, debe repararse que el Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto ahora interesa, en



el artículo 337, 2º párrafo, cuya validez no resulta puesta en duda, acepta que el fiscal tiene derecho al recurso en un caso como el aquí analizado, afirmar lo contrario sería caer en un contrasentido de las normas procesales.

-II-

Sentado lo expuesto, voy a señalar que respecto del plazo a partir del cual debe contarse el plazo de prescripción, que respecto del período 2008 que es el que se cuestiona y respecto del que, quien recurre, formuló agravio, ya tuve oportunidad de expedirme al respecto en la causa n° CPE 1882/2013/3/CFC3 "AFIP-DGI, s/recurso de casación", registro nro. 1330/17 del 4 de octubre de 2017, en que por unanimidad, con los votos de los Sres. Jueces Eduardo R. Riggi, Liliana Catucci y la suscripta nos pronunciamos por hacer lugar a los recursos interpuestos por la AFIP-DGI y por el Fiscal General y casar la resolución.

En dicha oportunidad, en que se discutía la posible extinción o la vigencia de la acción penal emergente de la presunta comisión del delito de evasión tributaria simple (art. 1º de la ley 24.769), que se les atribuía a Octavio Joaquín Reynoso y Eduardo David Durolans, en orden al Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio fiscal 2008, a cuyo pago se encontraba obligada la firma Tercerizaciones y Servicios Empresarios S.A.; señalé que *"En relación con el momento de consumación del delito de evasión tributaria, esta Sala con integración parcialmente distinta, ha resuelto en la presente causa que corresponde considerar el del ejercicio anual, aunque se trate de un tributo mensual -como en el caso del Impuesto al Valor Agregado- (cfr. Causa CPE 1882/2012/1/1, "Vivot; Santiago s/recurso de casación", reg. nro. 1824/16.1 y CPE 1882/2012/1/CFC2 "Prado, Alberto*

Fecha de firma: 8/10/2020

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL



#11612393#270707133#20201015131132694



Cámara Federal de Casación Penal

s/recurso de casación", reg. 1825/16.1; ambas de fecha el 6/10/2016)".

"Se afirmó allí que 'ya durante la vigencia de la ley 23.771 nuestro más Alto Tribunal entendió que la condición objetiva de punibilidad fijada en la ley penal tributaria cuando se refiere a la evasión 'durante un ejercicio o período fiscal' debe entenderse que es anual", ello además en consonancia con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Morrone" (Fallos 322:1699)".

Se agregó que "la propia ley 24.769 (B.O. 15/01/1997), determinó el alcance del concepto de 'ejercicio o período fiscal' al establecer expresamente en su art. 1° que, a los efectos de la configuración del delito de evasión simple se deberá atender 'cada tributo' y 'cada ejercicio anual, aun cuando se tratase de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un año', requisito que se mantiene incólume tras las recientes modificaciones introducidas por la ley 26.735 (B.O. 28/12/2011)".

"De este modo, por aquella previsión legal se confiere unidad delictiva a la evasión que pudiera verificarse, con respecto a un determinado tributo, a lo largo y dentro de un mismo ejercicio anual, independientemente de que la liquidación de aquél no se produzca por períodos fiscales anuales".

Agregué en aquella oportunidad que "se ha señalado en la obra de Baigún-Zaffaroni que 'La evasión se consume en el momento en que el obligado, luego de



transcurridos los plazos para el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias, las evade total o parcialmente por la cuantía prevista (\$400.000) o más. (...) El período a considerar es el del ejercicio anual y por cada tributo tomado separado, sin que interese si se trata de un tributo instantáneo o de un período fiscal inferior a un año' (Baigún, David; Zaffaroni, Eugenio R.; Código Penal y normas complementarias, Análisis doctrinal y jurisprudencial, Tomo 13; Bs.As.; Hammurabi; 2013; pág. 414)".

"Asimismo, se señaló en la obra citada por los autores Fernández Amallo y Mieres que 'la evasión sólo puede consumarse 'al cabo' de un ejercicio anual, de lo que en un sentido estricto derivan que si mediere antes del cierre del ejercicio anual una afectación del bien jurídico se estaría ante un hecho tentado, susceptible todavía de ser neutralizado" (ibídem).

"En la misma línea, Andrés D'Alessio afirma que '[c]on las distintas modificaciones sufridas por la LPT y las normas tributarias que definen el aspecto temporal del hecho imponible, la jurisprudencia ha ido ajustándose a aquellas', en el sentido de sostener que '...debe considerarse como fecha de comisión del hecho de evasión aquella en la cual se produjo el vencimiento de la presentación de la declaración jurada y el ingreso del monto correspondiente al último mes del ejercicio anual en cuestión, sin perjuicio de que, en el caso del IVA, se liquide y se pague por mes calendario' (D'Alessio, Andrés J.; Código Penal de la Nación Comentado y Anotado; Tomo III - Leyes Especiales Comentadas; Buenos Aires; La Ley; 2010; pág. 1415 y sgte.)".

Referí jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en tanto señaló en el fallo "Morrone"





Cámara Federal de Casación Penal

(Fallos 322:1699) que "la ley que establece la tributación sobre el valor agregado, no sólo dispone una forma de liquidación por mes calendario y el pago del impuesto, sino que también exige una declaración jurada anual que es la que en definitiva clausura o decide la condición económica del contribuyente frente al fisco a lo largo de un ejercicio final o año calendario".

Asimismo, sostuvo que "...la ley 24.769 (...) determina el alcance del concepto 'ejercicio o período fiscal' al establecer en su art. 1° que: "Será reprimido con prisión... siempre que el monto evadido excediere la suma de... por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratase de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un año'. En esas condiciones, cabe concluir que, la intención del legislador al redactar el art. 2° de la ley 23.771 en lo atinente a la expresión 'durante un ejercicio o período fiscal' aplicado a la evasión tributaria correspondiente al impuesto al valor agregado es que aquél debe ser entendido por años y no por períodos mensuales".

En igual sentido sobre ese punto, en su voto en disidencia -sobre la interpretación del tipo conforme su redacción de la ley 23.771- en el fallo "Valerga, Oscar Alfredo y otros s/Infracción Ley 23.771" (V. 160. XLI. REX, sentencia del 28/8/2007), los Ministros Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni destacaron que "...al momento de tipificar ciertas conductas penalmente relevantes en materia impositiva, el art. 1° de la nueva ley penal tributaria (24.769) substituyó la expresión 'ejercicio o período



fiscal' prevista en el régimen anterior (23.771) por la noción de ejercicio anual 'aun cuando se tratase de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un año".

También en la causa CPE 1882/2013/3/CFC3 ya referida, agregué que "en punto al momento comisivo del delito atribuido a los encausados por la falta de integración del Impuesto al Valor Agregado por período 2008 por la contribuyente Tercerización y Servicios Empresarios S.A., se precisó en los decisorios de cita que toda vez que la firma concluye sus ejercicios comerciales el 31 de octubre de cada año, 'se advierte que el ejercicio anual 2008 se encontraba integrado con las liquidaciones de los períodos fiscales correspondientes a los meses de noviembre 2007 a octubre 2008, ambos inclusive. Por lo tanto, la fecha de consumación de la presunta evasión del pago del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio anual 2008 de la sociedad mencionada se perfeccionó el 22 de noviembre de 2008 (fecha de vencimiento para el pago de la obligación del período fiscal 10/08 del impuesto referido...)".

En consecuencia, el presente es el criterio que entiendo corresponde aplicar a la cuestión.

-III-

Sin perjuicio de lo señalado, cabe destacar que en el caso, el instructor, dictó el sobreseimiento por dos motivos.

El primero porque entendió extinguidas por prescripción las acciones penales art. 336 inc. 1º, pero además en el caso de la instrucción, dejaron "...constancia de la aplicación al caso, también, de la causal prevista por el art. 336 inc. 3º -confr. consideraciones 16º a 19º)".





Cámara Federal de Casación Penal

En los puntos referidos, el juez señaló que *"quedó fehacientemente corroborado que el organismo recaudador no ha cuestionado la existencia de las operaciones por las cuales CARGILL S.A.C.E.I. adquirió los bienes para posteriormente efectuar las exportaciones a las que se hizo referencia por el primer párrafo de la consideración 8º de la presente"*; sino que lo que la AFIP desconoció fue a los proveedores que figuran en la documentación de tales adquisiciones, con citas de dictámenes de dicho organismo. Que más allá de quienes hayan sido los vendedores, las operaciones se realizaron verdaderamente y en estas condiciones no puede entenderse que hubiera existido un aprovechamiento indebido de reintegros y por ello el *"encuadramiento del hecho en la figura del artículo 3º de la ley 24.769 carece de sustento"* -fs. 4383/4392 vta.-.

La Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, por su parte, refirió de manera coincidente a como lo hiciera el instructor que el organismo recaudador no cuestionó las operaciones de compra de granos y cereales que luego Cargill exportó -con cita de los dictámenes- y agregó que en *"reiteradas presentaciones la Administración Federal de Ingresos Públicos convalidó al existencia de las transacciones"* -cfr. fs. 4473 vta.- y agregó que *"estando reconocidas las operaciones de compra de cereales, la existencia de esos bienes y las exportaciones que dieron motivo a las solicitudes de reintegros, no puede entenderse que hubiese existido aprovechamientos indebidos en los términos del artículo 3 de la ley 24.769"*



y en estos términos entendió que los hechos denunciados no encuadran en una figura legal y por ello la decisión se ajusta a las constancias de la causa. En consecuencia, dictó el sobreseimiento en los términos del inc. 3º del art. 336 del CPPN.

-IV-

Que sentado lo expuesto, cabe destacar que estamos frente a un pronunciamiento dictado por el Instructor que responde a dos motivos, el primero que la acción se encontraría prescripta, y el segundo, que los hechos imputados no constituyen delito.

Con motivo de las distintas apelaciones la Cámara confirmó el pronunciamiento por el segundo de los motivos.

Tal como fuera señalado el Ministerio Público Fiscal se queja porque no habrían tratado el agravio intentado respecto del año 2008, y no formula crítica alguna respecto de los restantes argumentos de la decisión.

Es decir, más allá de la prescripción o no de la acción penal, dejando a salvo mi criterio que ya fuera referido, entiendo que el recurso del Fiscal es insuficiente para habilitar la instancia.

En este sentido, cabe señalar que los recursos interpuestos tienden a cuestionar la prescripción o no de un período, pero nada dicen respecto de la causal objetiva del sobreseimiento, esto es que el hecho investigado no encuadra en una figura legal.

Al respecto, más allá de mi opinión personal al respecto, me encuentro limitada en mi jurisdicción por el valor "*tantum devolutum quantum appellatum*", que restringe la competencia del tribunal de alzada a la materia de los agravios.

No puedo ni debo extenderme en el tratamiento de cuestiones diferentes a las propuestas, extendiendo los





Cámara Federal de Casación Penal

límites del conocimiento propio, ante la posibilidad de afectar el derecho de defensa en juicio de los imputados, pues la defensa no pudo razonablemente presentar agravios o argumentos para anticiparse a una solución que volvió sobre una cuestión cuyo tratamiento había precluido -doctrina de Fallos: 341:553-, bajo apercibimiento de incurrir en un pronunciamiento arbitrario -Fallos: 301:107-.

En el caso, tenemos una decisión que beneficia a los imputados en primera instancia por dos motivos y que la alzada la mantiene por la causal del inciso 3 del art. 336 del rito y nada dice respecto del motivo del inciso 1.

El remedio intentado se limita a la causal del inciso 1, pero nada dice respecto de que los hechos no encuadran en ninguna figura legal.

En este sentido entiendo que, más allá de mi parecer al respecto, la decisión se encuentra incólume respecto del sobreseimiento porque el hecho investigado no encuadra en una figura penal y en tales términos cabe rechazar el recurso intentado por el representante del Ministerio Público Fiscal.

-V-

Por lo expuesto, voto para que se rechace el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, sin costas.

El señor juez **Diego G. Barroetaveña** dijo:

I.- De manera liminar, es menester señalar que el doctor García Berro juzgó que los encausados no son merecedores de reproche penal habida cuenta de que la acción penal del delito que se les imputa se halla



prescripta por el transcurso del tiempo y porque los hechos atribuidos no constituyen delito.

II.- A su turno, los magistrados Edmundo S. Hendler y Juan Carlos Bonzón, de la Sala A de la CNPE, confirmaron la resolución aludida en el acápite que precede.

Ello es así, por cuanto consideraron que, conforme lo normado en el art. 336, inc. 3º, del CPPN, las conductas denunciadas no encuadran en una figura penal (ver por todos fs. 4472/4474vta.).

III.- El representante del Ministerio Público Fiscal (cfr. fs. 4507/4510) recurrió la decisión de la cámara *a quo* en el entendimiento de que incurre en un error *in procedendo* porque inobserva la normativa prevista en el art. 123 del CPPN, que prescribe, bajo pena de nulidad, que los autos deben ser motivados.

En ese sentido, argumentó que en la resolución impugnada *"(n)o se abordó el principal argumento postulado por la representación de grado, quien sostuvo fundadamente que el delito previsto en el art. 3º de la ley 24.769 se vincula con el Presupuesto Anual del Estado, que es quien sufre el desapoderamiento, y en consecuencia, el 'ejercicio anual' al que refiere esa norma comprende de enero a diciembre de cada año [...]"* (fs. 4509).

También indicó que el colega que lo precedió *"(a)gregó que en el año 2016 la AFIP procedió a formular ampliación y nueva denuncia -cuya investigación se encuentra delegada en esa fiscalía- por la que se incorporaron nuevas solicitudes de reintegro de IVA por parte de Cargill que inciden -entre otros- en el año 2008 [...]"* (fs. *ídem*).

Además, adujo que la Cámara de la anterior instancia se limitó al análisis de la *"(t)ipicidad de la*





Cámara Federal de Casación Penal

conducta respecto de reintegros percibidos hasta el mes de febrero de 2008, sin siquiera hacer referencia a aquellos denunciados con posterioridad que fueran percibidos indebidamente por Cargill durante los meses de marzo a diciembre del año 2008 [...]" (cfr. fs. 4509vta.).

De tal modo, consideró que se dictó una resolución sin dar respuesta a los concretos planteos de esa parte y que "(T)al falencia, acarrea la nulidad de la resolución por resultar insuficiente la fundamentación, en virtud de lo normado por los arts. 18 de la Constitución Nacional y el art. 123 del CPPN [...]" (fs. ídem).

IV.- Sentado cuanto precede, como punto de partida, a fin de imprimir un adecuado tratamiento a los planteos traídos a estudio, es dable memorar los argumentos que invocó la Cámara a quo para arribar a la resolución en pugna.

Comenzó por evaluar que se investigan reintegros de créditos fiscales que se sospechan justificados con facturas apócrifas por operaciones de exportación y, de seguido, puntualizó que el organismo recaudador no cuestionó las operaciones de compra de granos y cereales que luego la empresa CARGILL exportó.

A tales efectos, tomó en cuenta lo declarado por la Supervisora de la División de Fiscalización de Devoluciones de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales (cfr. fs. 4248/vta.), el contenido del informe de fs. 3065/3069, y la nota de fs. 3070/3073.



A continuación, aseveró que *"(e)n reiteradas presentaciones la Administración Federal de Ingresos Públicos convalidó la existencia de las transacciones, tal como se desprende del informe de fs. 3550/3552 [...]"* (cfr. fs. 4473vta.).

En cuanto a la identificación de los vendedores de la mercadería exportada, remarcó que en el expediente obran explicaciones acerca de la intermediación de los corredores en las operaciones investigadas y la imposibilidad de conocer la identidad de los proveedores, remitiéndose a lo plasmado a fs. 2952/2982vta. y 4210/4214 (cfr. fs. 4473vta.).

En atención a lo expuesto, consideró que *"(e)stando reconocidas las operaciones de compra de cereales, la existencia de esos bienes y las exportaciones que dieron motivo a las solicitudes de reintegros, no puede entenderse que hubiesen existido aprovechamientos indebidos en los términos del artículo 3º de la ley 24.769 [...]"*, por lo cual el motivo invocado por el juez a cargo de la instrucción *"(e)n cuanto a que los hechos denunciados no encuadran en una figura legal se ajusta a las constancias de la causa [...]"* (cfr. fs. 4473vta./4474).

V.- Vemos así que el decisorio atacado evidencia un análisis correcto del cuadro probatorio reunido y cuenta con fundadas razones que llevaron a la Cámara de la anterior instancia a descartar la posibilidad de que la conducta de los encausados encuentre adecuación típica en la figura normada en el art. 3º de la Ley 24769.

Es de destacar que los agravios invocados por la parte recurrente cuestionan el dictado de la prescripción de la acción penal en orden a los presuntos hechos de defraudación tributaria que habrían llevado a cabo los responsables de la sociedad CARGILL en relación con el





Cámara Federal de Casación Penal

ejercicio comercial 2008, cuando, en rigor de verdad, no fue aquél el motivo por el cual se sobreseyó a los encausados en la decisión impugnada.

Aclarado lo anterior, es necesario poner de relieve que, a más de cuestionar la falta de motivación en los términos normados en el art. 123 del CPPN, la parte impugnadora nada dijo en relación a la causal objetiva del sobreseimiento que fue, en definitiva, aquella por la cual el tribunal de origen confirmó el auto liberatorio mediante un temperamento que no contiene transgresiones o defectos lógicos sino que, por el contrario, se encuentra sustentado en las circunstancias probadas en la causa.

En atención a lo expuesto en párrafos precedentes, nos apartamos de la pretensión de la parte recurrente, pues entendemos que la resolución de la Cámara de la previa instancia se encuentra suficientemente fundada y no resulta en absoluto arbitraria, al contar con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449 y 303:888).

VI.- Por todo ello, en concordancia con la solución propuesta por la colega que lidera el Acuerdo, y por los fundamentos expuestos en los párrafos precedentes, proponemos rechazar el recurso de casación incoado por el representante del Ministerio Público Fiscal, sin costas (arts. 456 inc. 2º, 470 y 471 *contrario sensu*, 530 y 532 del CPPN).

Es nuestro voto.

El señor juez **Daniel Antonio Petrone** dijo:



Por compartir -en lo sustancial- las consideraciones efectuadas en el voto del colega preopinante, adhiero a la solución allí propuesta y expido mi voto en igual sentido.

Por ello, en mérito al resultado habido en la votación que antecede el Tribunal **RESUELVE:**

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 4507/4510, contra la resolución de fs. 4472/4474 vta., sin costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y 532 del CPPN).

Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial -CIJ- (Acordada 5/2019 de la CSJN) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Firmado: Ana María Figueroa, Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña. Ante mí: Walter Daniel Magnone.

Fecha de firma: 20/10/2020

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL



#11612393#270707133#20201015131132694